



Cuadernos De Educación

Volumen trimestral

Junio 2009, Año 3, N° 10

cuadernosdeeducacion@gmail.com

Editorial

El pasado jueves 14 de Mayo El Mercurio de Santiago publicó: "Una inédita e histórica marcha por las calles del Puerto lideraron los rectores de las universidades estatales de la región, Aldo Valle y Patricio Sanhueza, respectivamente, de la Universidad de Valparaíso y Universidad de Playa Ancha". Esta crónica guarda relación con la masiva movilización que el pasado miércoles 13 de mayo llevaron a efecto académicos y estudiantes de las universidades estatales de Valparaíso por la defensa de la Educación Pública. Paralelamente, Faride Zerán, Premio Nacional de Periodismo y directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, apoyaba el llamado que el candidato a la presidencia del conglomerado Juntos Podemos, Jorge Arrate, hiciera a Sebastián Piñera para que devuelva el canal de televisión Chilevisión a la Universidad de Chile. es así como académicos plantean demandas que hasta aquí parecían ser propias y exclusivas de estudiantes universitarios. Es un hecho importante que hoy el mundo académico en su conjunto comience a demandar por la responsabilidad que al Estado le compete en la Educación Pública. La participación de los académicos aún es insuficiente para producir un cambio cualitativo importante en este aspecto, pero, si se entiende que la democratización de la sociedad incluye la democratización de las universidades, es muy probable que aumente esta participación.

Los problemas de la Educación Pública no sólo se reducen a sus necesidades económicas, las cuales, por cierto, son reales. Se advierte en las universidades estatales de Valparaíso otras preocupaciones, principalmente en la Universidad de Valparaíso, la cual se encuentra en franca discusión por la elaboración de nuevos estatutos Orgánicos que contemplan la participación de la comunidad universitaria en su conjunto, conocida como triestamentalidad. Durante todo el período de dictadura y también durante los gobiernos de la Concertación, ha habido una casi total despreocupación por la falta de participación de los distintos estamentos que conforman la Universidad. Los académicos escasamente tienen la posibilidad de opinar y sufragar, pero sin poder decidir el rumbo universitario. En cuanto a los estudiantes, sólo pueden opinar, y los funcionarios ni siquiera disponen de una instancia regular donde puedan ser escuchados. En algunos planteles de educación superior, por ejemplo en la Universidad de Valparaíso, existe la voluntad de parte de sus integrantes de revertir esta situación. Sin embargo, en otras universidades de la región como Católica de Valparaíso y Santa María, este hecho no da muestra de interesar de manera significativa a quienes la componen.

Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuestionó fuertemente el modelo chileno

para la Educación Superior, entre otras cosas, por tener uno de los mayores costos mundiales, pues el arancel promedio de las universidades públicas es de US\$ 3.140 anuales. señala además este informe que nuestro país requiere doblar el aporte económico estatal a la Educación Superior si se pretende ingresar al grupo de países más desarrollados del mundo. La Presidenta de la Nación, Michelle Bachelet, se refirió a este hecho en el mensaje del 21 de mayo, no obstante, nada mencionó respecto a reparar esta falta de recursos para la Educación Superior. Lo señalado muestra que la forma de financiamiento de las universidades, incluso no está siendo funcional al modelo económico neoliberal. Por cierto, tampoco responde a la satisfacción de las necesidades sociales de una educación que alcance a todos los sectores de nuestra sociedad.

Antes de concluir esta editorial, señalemos que la educación básica y media también tienen sus propios problemas por la forma como se entregan los recursos para llevar a cabo esta función. Nuestro país ya no resiste la municipalización de la educación. Es así como hemos estado en presencia de un paro prolongado del Colegio de Profesores en la región por la exigencia del pago del Bono de Subvención Adicional Especial (bono SAE).

En resumen, la Educación en nuestro país requiere de grandes cambios en su financiamiento, y en el caso de la Educación Superior, ésta requiere además de una ley verdaderamente democrática que reemplace la actual LOCE.

La Crisis Económica en Chile

Ricardo López

No son pocos los esfuerzos que realizan sectores neoliberales, de derecha y de la Concertación, para hacernos creer que la crisis en Chile ya habría tocado fondo y que los efectos en nuestra economía serían mínimos.

En un principio señalaron que estábamos blindados, luego que la crisis nos afectaría sólo en mínima medida, para finalmente señalar que nuestra economía está desacoplada del resto de las economías del mundo y que la recuperación, en Chile, ya se habría iniciado.

No importando lo falaces que son las afirmaciones anteriores, la máquina mediática surte efecto: la aprobación de la gestión de la Presidenta y del Ministro de Hacienda en porcentajes de 60% son la prueba del poder de influencia de los neoliberales en nuestro país. Por ello, resulta de vital importancia, de cara a las próximas elecciones y al objetivo de romper el binominalismo, que saquemos a la luz la realidad de esta pandemia económica en todas sus expresiones y fundamentalmente en sus dos expresiones más caras para el pueblo chileno: el carácter de crisis de derechos humanos y la cesantía.

Crisis económica: una crisis de derechos humanos.

Recientemente, en su informe anual 2009, Amnistía Internacional ha afirmado que la actual recesión es una crisis de derechos humanos.

En este informe denuncia que **“los ricos han causado la mayor parte de la destrucción pero son los desfavorecidos los que sufren las principales consecuencias”**.

Las cifras que se señalan en este informe son abrumadoras: hoy existen, en el mundo, 53 millones de nuevos pobres y vaticina que llegarán a existir 51 millones de personas que perderán su empleo durante este año.

Las críticas de este informe al FMI y al Banco Mundial los señalan como cómplices de políticas que han renunciado a la regulación económica y financiera a favor de las fuerzas del mercado, y que en general los gobiernos han fracasado a la hora de proteger los derechos humanos, la vida y el sustento de las personas.

En este informe, Amnistía Internacional se hace cargo de una crítica histórica de la izquierda al concepto tradicional de derechos humanos que los circunscribía al terreno civil y político y olvidaba necesidades básicas del ser humano como la salud, la alimentación, la vivienda y la educación.

Amnistía Internacional puntualiza que esta nueva visión sobre derechos humanos incorpora los derechos económicos y sociales a los tradicionales derechos civiles y políticos. Señala, además, que esta nueva visión es suscrita por la mayoría de las naciones, con la excepción intrigante de los EE.UU.

La organización critica **“las políticas, abiertas o solapadas, de discriminación, marginación y exclusión que han sido adoptadas por los estados y aplicadas con la connivencia de empresas o actores privados”**.

En particular, no ahorra críticas sobre las políticas de ajuste promovidas por el BM y el FMI, políticas que han debilitado las redes de seguridad social, fomentando la privatización de servicios públicos, la desregulación de las relaciones laborales y la reducción de los mecanismos de seguridad social.

Todo lo señalado por Amnistía Internacional ha ocurrido y sigue ocurriendo en Chile, la previsión social se ha privatizado con efectos desastrosos para los trabajadores chilenos.

El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, ha señalado que el sistema de AFP impuesto por la dictadura pinochetista y mantenido por cuatro gobiernos de la Concertación, se basa en dos concepciones utópicas que la crisis ha demostrado equivocadas:

1.- La ilusión que en el largo plazo los mercados accionarios tienen la estabilidad suficiente y son capaces de entregar elevadas rentabilidades. Esto no es así, en los últimos 100 años los mercados estuvieron a la baja durante más de 60 años y la rentabilidad promedio alcanzada es de 1% anual.

2.- La ilusión que la industria privada de seguros es capaz de garantizar las pensiones vitalicias. En la práctica, las principales empresas de seguros han caído en la insolvencia, así lo demuestra la hecatombe de AIG y la caída en más de un 90% en el precio de las acciones de ING, Principal Financials y Metlife, estas tres últimas concentran más del 50 % de las rentas vitalicias en Chile.

En Chile se han privatizado sectores económicos que constituían robustos mecanismos de seguridad y solidaridad social: la salud, la educación, los transportes, los servicios públicos básicos (agua, luz, energía, comunicaciones) y hoy el pueblo chileno se encuentra en total indefensión para sanarse, educarse, transportarse y soportar las maniobras monopólicas y abusivas de los consorcios privados que manejan el agua, la luz, el gas y las comunicaciones.

La verdad es que, cuando el BM y el FMI nos felicitan por el excelente manejo económico, o cuando la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) nos invita a ser miembros de ese exclusivo club, siempre que cumplamos con algunas condiciones como la de una mayor desregulación de las relaciones laborales, no debemos alegrarnos, más bien debemos preocuparnos, y mucho.

Servicios públicos que eran considerados derechos de los chilenos, sobretodo de los trabajadores, hoy son mercancías que se transan con un solo objetivo: el lucro.

Por lo anterior, los chilenos debemos conocer muy bien los programas económicos de los distintos candidatos a la presidencia, antes de emitir nuestro voto. Un programa que termine con las privatizaciones, que recupere el cobre, que desarrolle un sistema público de previsión, que desarrolle un sistema público y de calidad en la educación, entre otras, son medidas que harán la diferencia en el futuro de nuestros hijos.

Crisis económica: la cesantía.

Justo cuando la ortodoxia neoliberal, utilizando todo su poder mediático, nos comunicaba que habían decretado el fin de la crisis económica, aparecen los datos sobre cesantía del trimestre móvil (Febrero-Abril) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas, INE.

Los datos pusieron nerviosos a todos, especialmente a la ministra del ramo. No es para menos, más del 75% del país tiene cesantía sobre los dos dígitos (mayor a 10%).

“Llamamos a quienes no estén apremiados a que no presionen el mercado laboral, porque eso hace más difíciles las cosas” señaló la Ministra del Trabajo.

¿Qué es lo que se hace más difícil? La respuesta es una sola: las estadísticas. La ministra demuestra estar más preocupada por los índices que por generar puestos de trabajo.

Los desocupados son hoy 716.000 y se espera que durante el invierno lleguen a superar el millón de desempleados.

Los sectores más golpeados son la construcción, el comercio, la agricultura, la industria y los servicios (privatizados) de transportes, electricidad, gas y agua.

Mientras la producción industrial cayó un 11,1% en abril, se proyecta un índice mensual de actividad económica (IMACEC) de menos 5%.

Nueve de catorce regiones del país anotaron crecimientos negativos de la actividad económica. En esta caída sobresalen Los Lagos con un 16,6%, Arica con un 14,6% y Antofagasta con un 11%.

El ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, ha señalado: "...el peak del desempleo ocurrirá a mediados del 2010. No hay ninguna evidencia de que la crisis haya tocado fondo".

La cesantía continuará aumentando, porque la crisis en Chile será más larga dado el carácter exportador de materias primas de nuestra economía, deberemos esperar la recuperación de las economías desarrolladas hasta que les vuelva el apetito por nuestras riquezas básicas.

Pero también la cesantía aumentará, debido a que hoy las condiciones de despido son favorecidas por la externalización y subdivisión extrema que ocurren en el ámbito laboral.

La crisis se prolongará hasta que las tasas de ganancia del capital vuelvan a los niveles esperados por los grandes empresarios.

Mientras tanto, las fusiones y adquisiciones continuarán el proceso de concentración de la riqueza - los peces grandes tragando peces chicos - así como los despidos (por razones de la empresa) para asegurar la plusvalía que los capitalistas consideran que sus inversiones deben rentar.

LOS CAMBIOS QUE NECESITA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENO Y LAS POSICIONES DE LAS DIFERENTES CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA

¿Cuál es el sistema de educación óptimo para Chile y cuáles son los cambios indispensables a realizar para avanzar hacia ese óptimo?

Las características que debe tener un sistema de educación superior con equidad y útil para el país, en nuestra opinión, son:

- Primero, una concepción de la educación ante todo como un bien social, indispensable para el desarrollo integral del país, con dos misiones esenciales : una misión filosófica crítica y una misión impulsora del desarrollo global de la sociedad.

- Segundo, un Estado que asegure económica y estructuralmente el funcionamiento de este bien social a través de un sistema público de educación, que sea un referente de calidad y que asegure el derecho a la educación superior de los chilenos en base a los méritos y aptitudes de los postulantes, y no en función de sus ideas políticas ideológicas o religiosas ni al nivel socioeconómico que tengan en la sociedad.

- Tercero, una universidad que cultive todas las disciplinas del conocimiento y del arte, desarrollando un profundo sentido científico y creador, sin condicionar el quehacer universitario a consideraciones de tipo económico, como el autofinanciamiento.

Todo lo anterior, respetando la libertad de crear organismos privados de educación, con las únicas limitaciones de que la calidad de su trabajo no esté bajo los niveles de calidad del sistema público y del respeto a las leyes generales de la República.

Paradójicamente, los cambios a realizar para enfrentar las exigencias del presente y del futuro, respetando las características enunciadas, nos orientan hacia el pasado, es decir, hacia el sistema tradicional de educación superior, basando esta afirmación en dos antecedentes: más de 100 años de nuestra historia universitaria y los modelos de educación vigentes en la mayor parte de los países desarrollados y de Latinoamérica.

Desde la fundación de la Universidad de Chile por Andrés Bello (1842) se instala en el país un sistema de educación superior y una tradición universitaria que perdura hasta 1973 y en la que está reflejada la tradición europea.

A partir de ese momento se estructura en Chile un sistema público de educación superior, estrechamente ligado a la reflexión sobre el rumbo de la sociedad y de la cultura nacional que contribuye fundamentalmente al desarrollo cultural, científico, económico y tecnológico del país, donde el Estado asume plenamente sus responsabilidades económicas y de control del mismo.

Este sistema público no impide la creación de un conjunto de universidades privadas, las que junto con las públicas actúan coordinadamente y alcanzan en 1973 su autonomía financiera.

La evaluación de este modelo, que progresivamente fue democratizando su vida interna y el ingreso a la universidad (aumento en la cobertura y educación gratuita) puede hacerse a la luz de sus logros:

El impulso cultural (creación de orquestas, ballet, teatro, impulso de las letras, etc.) del conjunto de las universidades contribuye a crear un ambiente de tal nivel que permite el surgimiento y desarrollo de verdaderos gigantes de la cultura mundial (Neruda, Mistral, Matta, Arrau, Violeta Parra, etc.)

La calidad de los profesionales permitió abordar empresas gigantescas como la industrialización de Chile (40 años), la modernización del campo, con la reforma agraria como principal elemento, y la administración y explotación del cobre nacionalizado.

Ahora bien, si nos limitáramos únicamente la referencia histórica pudiese plantearse legítimamente que este balance sólo es un recuerdo nostálgico del pasado, sin mucha relación con el presente y el futuro, pero, paralelamente y hasta hoy en día, en la estructura universitaria de casi todos los países desarrollados y de América Latina la presencia del estado en la educación superior y en sus otros niveles es preponderante y decisiva y la universidad pública constituye el soporte de la educación superior.

A manera de ejemplo, según datos estadísticos del B.M (año 2000) en una muestra de los 25 países de la C.E.E., más otros como USA, Canadá, México, Japón, Corea, Australia, India, Brasil, Suiza, Indonesia, Cuba, Uruguay, Argentina y Venezuela, el Estado financia el 90% de la educación básica y media y el 70% de la educación superior, lo que posibilita la educación gratuita en la mayoría de ellos.

Los egresados de sistemas públicos poseen, a nivel de la enseñanza media, una formación cultural y de conocimientos junto a la

capacidad de análisis superior al de buena parte de los egresados de la educación superior chilena, y la calidad de los egresados de la educación superior los ha transformado en motores de la cultura y el desarrollo en el mundo, todo lo cual evidencia las bondades de esta opción.

El Estado asume en la mayoría de los países mencionados un control sobre la educación, lo que le permite, en beneficio de todo el país, detectar, desarrollar y aprovechar en forma óptima todas las potencialidades intelectuales, artísticas o artesanales de su juventud y colocarlas al servicio de la sociedad.

A la luz de estas experiencias estimamos que la reconstrucción del sistema de educación pública (abortado brutalmente en 1973) representa el verdadero cambio que la educación chilena necesita, postura acogida por el Juntos Podemos Más y por algunos otros candidatos que se encuentran fuera del ámbito de los principales conglomerados políticos.

Los candidatos de la Alianza y de la Concertación no han presentado aún proposiciones de "cambios" realmente en concordancia con la profundidad de la crisis educacional, y sus proposiciones, muchas veces concordantes, no salen del marco del último cambio verdaderamente profundo en la educación, es decir, el cambio impuesto por la dictadura militar con los DFL de 1981, cambio que sin embargo no apuntaba realmente a avanzar en equidad y calidad, sino que perseguía objetivos políticos e ideológicos, como se desprende de algunos documentos de esa época.

Así, en el discurso de Chacarillas, Pinochet plantea que: "sabemos que si no existe una educación congruente con la orientación que estamos imprimiendo a Chile nos exponemos a fracasar pues estaríamos edificando en la arena" y en la directiva presidencial sobre educación nacional de Marzo de 1970 los estudios superiores son concebidos como "una situación de excepción para la juventud y quienes disfruten de ella deberán ganarla con esfuerzo, y además, debe pagarse o devolverse por quien puede hacerlo, ahora o en el futuro". Más adelante en el DL 4002 sobre la flexibilidad curricular permite que en las municipalidades pobres los contenidos puedan limitarse a aprender a leer, las cuatro operaciones, algo de historia y geografía y reglas de urbanidad y moral, en contraposición con contenidos mucho más ricos para los sectores de altos ingresos.

Es en base a estas ideas centrales (elitización y destrucción del sistema educacional tradicional para facilitar la implantación del nuevo modelo) que se estructuró el modelo neoliberal de educación, donde la

educación no es concebida ni como un derecho ni como un bien social sino como una inversión en capital humano recuperable, con la única concesión que hasta cierto nivel básico, (educación básica en un comienzo), y por ser necesario para el sistema un nivel mínimo de conocimientos y formación, acepta una subvención estatal para los más pobres. No constituyendo el acceso de los pobres a la educación superior una necesidad del nuevo sistema político, no se justifica un subsidio para los sectores que no pueden pagarla.

El profundo carácter elitista de esta concepción se ha ido acentuando a lo largo de estos 30 años, facilitado por el Estado que ha permitido el aumento de los aranceles por sobre el IPC y por sobre el crecimiento del PIB, y el grado que ha alcanzado esta elitización ha sido medido por la encuesta Casen 2000 que indica que aproximadamente 2/3 de los estudiantes de la educación superior pertenecen al quintil superior de ingresos y no más de un 10% de ellos provienen del quintil inferior, que ha accedido a este nivel sobre la base de un gran endeudamiento.

En la destrucción de las universidades provenientes del sector público (tres de ellas están viendo amenazada su existencia) se destacan los siguientes hitos:

En los dos años siguientes al golpe militar, según el anuario estadístico de UNESCO (1980), la razzia alcanza a 11.419 profesores expulsados de los 22.211 en ejercicio en 1974, y tiene una segunda fase importante en los años 80, después de los DFL, de 1981.

Desde 1981 comienza a operar un elemento especialmente eficaz en este proceso destructivo, que es la disminución gradual del aporte fiscal, no sólo a las universidades públicas sino también a las privadas del Consejo de Rectores (del 2% del PIB hasta cerca del 0,5% del PIB), a tal extremo que la Universidad de Chile hoy en día sólo financia el 15% de su presupuesto con este aporte.

A lo largo de estos casi 40 años el control férreo de la gestión de las universidades derivadas de la U. de Chile y Técnica a través de la Contraloría, en oposición a la libertad sin control de las nuevas universidades privadas, no sólo ha permitido el desarrollo y la realización de excelentes negocios, sino que ha permitido el traspaso progresivo de recursos fiscales a las nuevas universidades privadas (AFI de un 50 %, donaciones, franquicias en las contribuciones, etc.), todo esto en detrimento del aporte a lo que queda de las universidades públicas y sin que este trato preferencial esté avalado por una mayor calidad de las nuevas universidades.

La responsabilidad en la mantención de este modelo por casi 30 años es compartida por la alianza y la concertación. Para los primeros el modelo neoliberal es su hijo legítimo, construido a imagen y semejanza de los intereses materiales e ideológicos que representan, en tanto que para la Concertación es un modelo sano que ha sido administrado por ella por casi 20 años con la excusa de declarar que los excesos del mercado eran controlables.

En vísperas de las elecciones cabe preguntarse:

¿Cuáles son los grandes cambios que ofrecen los dos principales conglomerados políticos para superar el desastre en la educación superior y en todo el sistema educacional?

¿Cómo superar la segregación educacional y la baja calidad en la formación a todos los niveles, reflejo de lo cual es que el 80% a 90% de la población (un 30% entre estudiantes de la educación superior) son analfabetos funcionales?

¿Cómo pretender que Chile llegará a ser un país desarrollado si la formación de doctores está a años luz de la de países más pequeños y con menos riqueza y número de habitantes que Chile (Holanda, Suecia, Finlandia, etc.), si cuenta con menos del 50% del número de científicos necesarios para el grado de desarrollo actual y si la calidad de los profesionales que forma está por debajo de los estándares internacionales? (Banco Mundial 1999).

La Alianza y la Concertación no han dado a conocer aún proposiciones que se orienten a resolver la profunda crisis educacional, cuyas principales características son las señaladas más arriba y las que se conocen distan mucho de ser los grandes cambios prometidos, pues son pocas en cantidad y pobres en contenido. En consecuencia, sólo queda inferir sus políticas educacionales, en el caso que ganen las elecciones, por sus comportamientos los últimos 20 años en el gobierno o el parlamento.

Entre las soluciones que la Alianza propone está el aumento de la subvención escolar al doble, cantidad que a la luz del conflicto por las asignaciones no pagadas desde el 2007 indica que, en las comunas más pobres, alcanzaría escasamente para pagar el sueldo de los profesores y parte de la deuda. Fuera de esta proposición se culpabiliza exclusivamente a los profesores, al estatuto docente y a los 20 años de concertación por la situación y la baja calidad de la educación, insinuando, sin decirlo abiertamente, que la nueva razzia sería el camino para un cambio profundo en la educación (LGE y la autorización para que

cualquier profesional pueda integrarse a la educación). Si bien la Concertación es cómplice del desastre, y hay un número importante de profesores que ya debiera haber jubilado (si las jubilaciones permitieran vivir con cierta dignidad) y la calidad de los nuevos profesores no puede lograr ser superior a la calidad del sistema de educación superior (deteriorado por la aparición de las nuevas universidades privadas), el desastre no se origina en 1990 sino en Septiembre de 1973 y muy particularmente en 1981, y forma parte de la obra de Pinochet que Piñera valora.

Otra de las proposiciones conocidas se origina en la crítica al papel que el estado juega en el manejo de los recursos de investigación e innovación, y en su decisión que los privados reemplacen al Estado, lo que sólo puede augurar un nuevo cercenamiento de la presencia del Estado en la creación de conocimiento.

La Concertación se encuentra aún en la etapa de afinamiento de su programa, pero, respecto de educación, su prontuario permite asegurar que en su programa no estarán presentes los cambios indispensables.

Como referencia a la ninguna capacidad para realizar estos cambios basta referirnos a la actitud de la Alianza y la Concertación, que actuaron de consenso (tomados de la mano) para aprobar la L.G.E.

En el momento de elaborar esta ley no fueron considerados ni los planteamientos de los estudiantes (movimiento de los pingüinos) ni los del consejo asesor presidencial para la calidad de la educación, y la Alianza impuso a la Concertación sus posiciones centradas en la defensa de la educación privada y en cerrar las puertas a toda posibilidad de comenzar a reconstruir un sistema público de educación.

Más profundas y apuntando muchas veces a los problemas más cruciales de la crisis son las opiniones personales de algunos especialistas en educación y algunos planteamientos del movimiento Educación 2020, pero dejaremos para otro artículo el análisis de éstos y, sobre todo, el por qué no pueden imponerse en los marcos de un modelo neoliberal de educación y cómo muchos de ellos han sido implementados desde unos 50 años en los marcos de los sistemas públicos de educación del mundo.